



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ **ABOGADO ESPECIALISTA**

Florencia, Caquetá, 03 de agosto de 2023

Doctor:

FABIO FERNANDO JIMÉNEZ CARDONA
JUEZ TERCERO ADMINISTRATIVO DE FLORENCIA.
E. S. D.

Asunto: alegatos de conclusión
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Demandante: Hector Helmer Carvajal
Demandado: ESE San Rafael de San Vicente del Caguan Y Otros
Radicado No. 180013333003-2018-00560-00

Cordial saludo

JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ, mayor de edad, con domicilio en el Municipio de El Doncello, Caquetá, abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.117.506.434 de Florencia, Caquetá, y portador de la Tarjeta Profesional No. 226.452 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado Judicial del **HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN-CAQUETÁ** (según poder que me ha otorgado el doctor **MARLIO ANDRES POSADA MUÑOZ**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 76.332.178 de Popayán, en calidad de Representante Legal de la ESE), dentro del término legal me permito presentar y sustentar, los alegatos de conclusión de primera instancia, en los siguientes términos:

1.- El régimen de responsabilidad patrimonial del Estado consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, prevé la responsabilidad del Estado únicamente por los daños antijurídicos que le sean imputables y que hayan sido causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Para que surja para la Entidad Pública la obligación de reparar un daño resulta necesario que la lesión pueda serle imputada jurídicamente.

Frente al alcance de la citada disposición Constitucional es claro que para poderle atribuir responsabilidad al HOSPITAL SAN RAFAEL, deben configurarse indiscutiblemente los tres elementos constitutivos de esta, al igual que establecer cuáles son los eximentes de responsabilidad a saber:

A.- Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia. La falta o la falla que se trata no es la personal del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la Administración.

B.- un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho, bien sea civil, administrativo, etc. Con las características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable como de que sea cierto, determinado o determinable, etc.

C.- Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio no habrá lugar a la indemnización.

Carrera 2 No. 6-28 B/ Belalcazar – El Doncello, Caquetá
Email: jersonpenagos89@gmail.com - info@hospitalsanrafael.gov.co
Celular: 3118406298



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ ABOGADO ESPECIALISTA

Así las cosas y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, el actor tiene que representar en el juicio la existencia de unos daños que reúnan las siguientes cualidades: que sea cierto, particular y anormal y que recaiga sobre una situación de acto o de hecho, o que esté protegida jurídicamente. En cuanto al nexo de causalidad: También el actor debe demostrarlo con prueba directa o indirecta, porque la ley no ha señalado en materia de relación causal ni presunciones legales respecto de las cuales, probado un hecho el legislador infiera la causalidad adecuada, ni tampoco los conocimientos del Juez sobre la realidad social lo autorizan para deducir con certeza el adecuado nexo de causalidad. La prueba del nexo puede ser: a) directa, mediante los medios probatorios que lo representan por sí mismo y/o b) indirecta, mediante indicios; este medio de convicción lógico indirecto, requiere de la demostración de unos hechos indicadores que apunten con fuerza el hecho indicado y el demandado para exonerarse podrá probar causa extraña: o por hechos exclusivos de la víctima o del tercero o por fuerza mayor.

Analizadas las pruebas aportadas al proceso, que no se configuran los elementos estructurales de la responsabilidad extracontractual del Estado y en especial no existe una falla del servicio, teniendo en cuenta que la atención que se le brindó al señor HECTOR HELMER CARVAJAL, se desarrolló en estricto cumplimiento de las obligaciones que le asistían a los galenos de la institución HOSPITAL SAN RAFAEL de San Vicente del Caguán, el cual fue adecuado, oportuno y pertinente al arte médico aplicable para el caso Y EL PACIENTE NO REQUERÍA DE OTRO MANEJO MÉDICO ADICIONAL AL EFECTUADO POR PARTE DEL MÉDICO GENERAL. Conviene agregar que el paciente fue negligente y dejó evolucionar la patología al no guardar reposo lo que le generó una lesión diferente que no fue informada por el paciente al momento del segundo ingreso al Hospital San Rafael.

En lo relacionado con el régimen de responsabilidad aplicable, el honorable Consejo de Estado Colombiano, a través de un caudal de pronunciamientos jurisprudenciales ha sentado su postura, en cuanto la prestación del servicio médico es de carácter subjetiva, que el régimen bajo el cual se debe de estudiar la responsabilidad del estado es la de la falla probada del servicio, por lo anterior así indicado la alta corporación que:

“Para comprobar la configuración de una falla del servicio, será indispensable que se demuestre que la atención médica no cumplió con [los] estándares de calidad fijados por el estado del arte de la ciencia médica” para que pueda declararse la responsabilidad extracontractual del Estado. (...) la falla en el servicio –objeto de censura– deberá estar dada por la negligencia e impericia de no agotar todas las previsiones que la lex artis sugiere a efectos de atemperar los males sufridos por los pacientes y no el simple hecho de que el personal médico desacierte en la ruta terapéutica para mitigar o superar la patología –a menos que sea abiertamente equivocado”¹

A su vez el honorable **CONSEJO DE ESTADO** ha estimado que, en los casos de responsabilidad médica, el régimen bajo el cual se encausa el proceso es bajo el de la **falla probada**, siendo una excepción la aplicación del régimen objetivo:

¹ sentencia del 27 de abril de 2011, Exp. 20315,

Carrera 2 No. 6-28 B/ Belalcazar – El Doncello, Caquetá

Email: jersonpenagos89@gmail.com - info@hospitalsanrafael.gov.co

Celular: 3118406298



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ

ABOGADO ESPECIALISTA

“La Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia de 19 de abril 2019, unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos títulos de imputación para la solución de los casos sometidos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar, frente a determinadas situaciones fácticas, un específico título de imputación. En este sentido, en aplicación del principio iura novit curia, la Sala puede analizar el caso bajo la óptica del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable, de cara a los hechos probados dentro del proceso, sin que esto implique una suerte de modificación o alteración de la causa petendi, ni que responda a la formulación de una hipótesis que se aleje de la realidad material del caso, o que se establezca un curso causal hipotético de manera arbitraria⁹. No obstante que el modelo de responsabilidad extracontractual del Estado colombiano no privilegió un título de imputación, la posición de la Corporación en esta época se orienta en el sentido de que la responsabilidad médica, en casos como el presente, debe analizarse bajo el tamiz del régimen de la falla probada, lo que impone no sólo la obligación de probar el daño del demandante, sino, adicional e inexcusablemente, la falla por el acto médico y el nexo causal entre esta y el daño, sin perjuicio de que en los casos concretos el juez pueda, de acuerdo con las circunstancias, optar por un régimen de responsabilidad objetiva.”²

Reiterando que la responsabilidad por la prestación del servicio de salud es de naturaleza subjetiva, lo cual indica que el régimen aplicable, es el de falla probada del servicio, por lo cual no basta que quien alegue que existió una falencia o un defecto en la prestación del servicio de salud, solo se limite a enunciarla, si no por el contrario debe probar en que radica la falla o la falencia, así como también debe indicar el daño y el nexo causal entre aquella y este.

Para que obre plenamente la cláusula de responsabilidad contenida en el artículo 90 de la constitución, no solo basta la ocurrencia del daño, sino que este debe ser atribuible a la negligencia o impericia del personal médico o del centro asistencial, y de su omisión o acción conlleve a la producción de este (daño), el cual no debe soportar el administrado, el cual ya ha sido debatido en citada jurisprudencia, en los términos:

“La responsabilidad estatal por fallas en la prestación del servicio médico asistencial no se deriva simplemente a partir de la sola constatación de la intervención de la actuación médica, sino que debe acreditarse que en dicha actuación no se observó la lex artis y que esa inobservancia fue la causa eficiente del daño. Esa afirmación resulta relevante para aclarar que si bien de conformidad con lo previsto en el artículo

² CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN A- consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO- Bogotá, D.C., treinta y uno de enero (31) de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 05001-23-31-000-2004- 04848-01(47975) <http://190.217.24.55:8080/WebRelatoria/FileReferenceServlet?corp=ce&ext=doc&file=2126871>

Carrera 2 No. 6-28 B/ Belalcazar – El Doncello, Caquetá

Email: jersonpenagos89@gmail.com - info@hospitalsanrafael.gov.co

Celular: 3118406298



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ ABOGADO ESPECIALISTA

90 de la Constitución, el derecho a la reparación se fundamenta en la antijuridicidad del daño, no es suficiente verificar que la víctima o sus beneficiarios no estaban en el deber jurídico de soportarlo para que surja el derecho a la indemnización, se requiere que dicho daño sea imputable a la Administración, y sólo lo será cuando su intervención hubiera sido la causa eficiente del mismo"³.

Para el presente caso, la parte actora no logra acreditar en que consistió la falla en la prestación del servicio de salud o la incorrecta aplicación de la lex artis durante las atenciones médicas que se le brindó la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL, para que se profiera condena en contra de mi prohilada, quien le brindo la atención y servicio medico acorde al estado del paciente, con un actuar eficiente y acorde a su nivel de complejidad.

Conforme a la anterior apreciación, se tiene que dentro de la pruebas obrantes dentro del expediente se presentó como prueba documental, la historia clínica del paciente HECTOR HELMER CARVAJAL, y en ella se encuentran consignadas las actuaciones del personal medico y quienes asistieron al paciente durante sus ingresos al Hospital, en el cual se evidencia que recibió una adecuada y eficiente prestación del servicio de salud, que el centro medico la presto acorde con su nivel, que estaba capacitado para realizarlo y que las lesiones que predica en la demanda se produce por situaciones ajenas a la prestación del servicio médico, conforme a lo anterior no obra en contrario que pueda desvirtuar la falta de impericia o diligencia en la atención por parte del personal galeno, siendo de momento recordar que; la actuación del médico es de medios y no de resultados aunado a lo anterior es determinante que el hospital San Rafael de San Vicente del Caguán es un centro médico de primer nivel, por ello siempre se solicitó la remisión del paciente.

Conforme a lo anterior se evidencia que no le asiste responsabilidad a la institución Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, en el daño antijuridico que se le pretende imputar, lo que si se configura frente a la anterior premisa es la teoría de **la CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA dado que el paciente** fue negligente al no seguir las recomendaciones médicas y dejó evolucionar la patología al no guardar reposo lo que generó una lesión diferente que no fue informada por el paciente al momento del segundo ingreso al Hospital San Rafael.

Dicha teoría, se ha desarrollado en el tiempo y es acogida en las diferentes líneas jurisprudenciales :

“si la culpa de la víctima es la única causa exclusiva del daño, el fundamento del efecto exonerado total parece claro: la intervención de la víctima en su propio daño dirime todo posible nexa causal con el hecho que se imputa al demandado”⁴.

Queda claro que la culpa de la víctima debe ser considerada como un eximente de responsabilidad total, siempre que esta sea la única causa exclusiva y determinante del daño. La actuación de la víctima es la que, inequívocamente, podría conllevar como consecuencia ese determinado resultado dañoso.

Esta figura tiene como fundamento que, quien con su comportamiento por acción o por omisión, con culpa o sin ella, produjo exclusivamente su propio perjuicio, debe asumir las

³ consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2011, exp. 19.192.

⁴ Domínguez Ávila, sobre la culpa de la víctima y la relación de causalidad en responsabilidad civil.



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ ABOGADO ESPECIALISTA

consecuencias de su actuar en su totalidad, para el caso en concreto se configura la culpa exclusiva de la víctima, porque el señor HECTOR HELMER CARVAJAL, pese a tener toda la información y la red de servicios de salud de diferentes niveles, hizo caso omiso a todas las recomendaciones del médico general y de los especialistas, sino que al contrario deja transcurrir el tiempo y solamente transcurre cuando avanza la patología.

Adicionalmente, no se le puede endilgar responsabilidad del daño antijurídico a la institución Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán, cuando en donde presuntamente se causa el daño es la clínica Medilaser, en donde se practica la cirugía, por lo cual se configura la falta de legitimación en la causa, como la define EL CONSEJO DE ESTADO⁵ en los siguientes términos:

"(...) La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada (...)"

*Ahora bien, también ha sostenido la Sala que la legitimación en la causa puede ser de hecho cuando la relación se establece entre las partes por razón de la pretensión procesal, es decir, de la atribución de una conducta que el demandante hace al demandado en su demanda, o material frente a la participación real de las personas en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas personas hayan demandado o hayan sido demandadas, por lo cual la ausencia de esta clase de legitimación, no constituye una excepción de fondo porque no enerva la pretensión procesal en su contenido, sino que es una condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito, sin que el estar legitimado en la causa otorgue el derecho a ganar, lo que sucede aquí es que si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto, no porque él haya probado un hecho que enerve el contenido material de las pretensiones, sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo – no el procesal –; **si la falta de legitimación en la causa es del demandado al demandante se le negarán las pretensiones, no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho, sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder, y, por eso, el demandado debe ser absuelto** (negrilla fuera de texto original).*

La anterior se configura al no ser la demandada Hospital San Rafael, quien practica la cirugía al señor HECTOR HELMER CARVAJAL, pues su actuación se limita hasta la remisión del paciente hasta la clínica Medilaser, para que sea atendido por un especialista y una vez llega al centro médico de II NIVEL, es intervenido quirúrgicamente, en donde presuntamente se ocasionaron los daños.

⁵ CONSEJO DE ESTADO. Subsección C, Consejero Ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Radicación No. 22.032, Catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012)



JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ **ABOGADO ESPECIALISTA**

Sumado a todo lo comentado, en este caso, las pruebas aportadas al proceso son escasas para determinar la responsabilidad del HOSPITAL SAN RAFAEL Y no existe prueba que acredite los perjuicios materiales y morales que reclaman los actores, , lo que nos muestra que no existiría ningún nexo de causalidad que demuestre tal carga, toda vez que; de conformidad con lo establecido en el Código General del Proceso que consagra el principio de la carga de la prueba, conforme al cual, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

Por lo anterior señor juez dejo sentado mis alegatos de conclusión, para que sean tenidos en cuenta al momento de proferir una decisión de fondo, negando las pretensiones de la parte demandante.

Comedidamente,

JERSON HAROL PENAGOS RODRÍGUEZ.

CC No. 1.117.506.434 de Florencia, Caquetá,
T,P No. 226.452 del Consejo Superior de la Judicatura